

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00257-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela promovido por el ciudadano **CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ** en su calidad de presidente vocero de la **VEEDURIA DE MOTOCICLISTAS** contra **EL MINISTERIO DE TRANSPORTE**.

**ANTECEDENTES**

El ciudadano **CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ** en su calidad de presidente vocero de la **VEEDURIA DE MOTOCICLISTAS** inicia acción de tutela contra **EL MINISTERIO DE TRANSPORTE** por considerar que se le está vulnerando **EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** y el de **IGUALDAD**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Refiere que el 14 de julio de 2020 radicaron derecho de petición ante el Ministerio de Transporte a través del canal digital de la entidad; sin embargo, no se ha procedido a dar contestación de fondo, de manera clara, precisa y congruente, por lo que considera que dicho actuar es vulnerador del derecho fundamental de petición, así como el derecho a la igualdad.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales invocados y se ordene al **MINISTERIO DE TRANSPORTE** conteste el derecho de petición conforme lo reseñado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-487 del 2017.

**PRUEBAS**

Derecho de petición “ASUNTO: Solicitud información y copias simples formulario de comparendo único nacional”

**ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 13 de agosto de 2020, se ordenó la notificación del **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 13 de agosto de 2020, se notificó al **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.-El **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, dentro de la oportunidad legal conferida por el Despacho, procedió allegar contestación a la acción constitucional.

### **CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.**

La entidad accionada, refirió: “(...) El Ministerio de Transporte se permite manifestar ante el honorable despacho judicial que en ningún momento ha vulnerado ni pretendido vulnerar el derecho fundamental del derecho de petición, el grupo atención técnica en transporte y tránsito del Ministerio de Transporte mediante radicado salida MT No.20204070461881 del 14 de agosto de 2020, dio respuesta de manera clara, precisa, congruente y de fondo al accionante – CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ en calidad de presidente vocero de la Veeduría de Motociclistas – sobre la solicitud “ información de las comparenderas”, con fundamento en los documentos aportados con su comunicación; mediante correo electrónico: [veeduriademotociclistas@gmail.com](mailto:veeduriademotociclistas@gmail.com) conforme lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 para la notificación electrónica”.

### **CONSIDERACIONES**

#### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

#### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

#### **Procedencia de la acción de tutela.**

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: “*Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento*

*preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, el ciudadano **CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ** en su calidad de presidente vocero de la **VEEDURIA DE MOTOCICLISTAS**, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del artículo citado en el párrafo que antecede.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, **EL MINISTERIO DE TRANSPORTE**, es un ministerio de la República de Colombia encargado de definir, formular y regular las políticas de transporte, tránsito; aquel se le endilga la vulneración de los derechos invocados toda vez que, según dicho del accionante, no ha procedido a dar contestación a la petición que le fuera elevada.

## **INMEDIATEZ**

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el accionante en su escrito de tutela, aludió que petición al MINISTERIO DE TRANSPORTE el 14 de julio de 2020; por lo anterior, considera la Juzgadora que el mecanismo subsidiario de tutela se interpuso dentro de un término razonable.

## **SUBSIDIARIEDAD**

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

## **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado**

### **Derecho Fundamental de Petición**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

*“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.*

*El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

*La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.*

*Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).*

*El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del*

*vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.*

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.**

Corresponde a esta juzgadora determinar si el **MINISTERIO DE TRANSPORTE** vulneró los derechos invocados por la accionante, al no proceder a contestar el derecho de petición elevado el 14 de julio de 2020.

Al Despacho se arrió derecho de petición, del 14 de julio de 2020, dirigido a la Dra. ANGELA MARIA OROZCO – MINISTRA DE TRANSPORTE solicitando: “1. Copia simple de la comunicación por medio de la cual su despacho autoriza expresamente a la Secretaria Distrital de Movilidad para operar las COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS por medio de las cuales generan su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas. 2. Copia simple de la comunicación por medio de la cual su despacho autoriza expresamente a otros organismos de tránsito a nivel nacional para operar las COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS por medio de las cuales generan su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas. 3. Copia simple de la comunicación por medio de la cual la Secretaria Distrital de Movilidad – SDM solicita formalmente ante su despacho se sirva autorizarla expresamente para generar su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas, que son generadas por las COMPARENDERAS ELECTRONICAS. 4. Copia simple de la comunicación por medio de la cual su despacho autoriza expresamente a la Secretaria Distrital de Movilidad para generar su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas, que son generadas por las COMPARENDERAS ELECTRONICAS, de acuerdo a lo expresado por dicho organismo de transporte en la respuesta dada a una solicitud concerniente al formulario de comparendo único nacional en la que puntualmente cito: “Además, sostuvo que dicho manual resulta de gran importancia para el caso en concreto, teniendo en cuenta que es a través de este documento que el Ministerio de Transporte, fija ahí, los lineamientos generales que debe contener cualquier formulario de comparendo que sea adoptado por cualquier organismo de tránsito, por lo tanto, es independiente de cada organismo el formulario y/o formato que adopte para la imposición de comparendos, siempre y cuando presenten los requisitos esenciales”. (Negrilla y Subrayado son propios). 5. copia simple de la comunicación por medio de la cual otros organismos de tránsito a nivel nacional solicitan formalmente ante su despacho se sirva autorizarlos expresamente para generar su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas, que son generadas por las COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS. 6. Copia simple de la comunicación por medio de la cual su despacho autoriza expresamente a otros organismos de tránsito a nivel nacional para generar su propio formulario de comparendo único nacional, más conocidos como tirillas, que son generadas por las COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS. 7. La SDM por medio de los policiales de la Especialidad de Tránsito y Transporte por medio del Convenio Interadministrativo que media entre las partes, no estaría entregando en el sitio copia formulario de comparendo único nacional de acuerdo con lo

ordenado en el art. 22 de la ley 1383 de 2010(...) puesto que en la tirilla la SDM cita: “este documento es de carácter informativo . La copia del comparendo puede ser consultada en: [https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta\\_de\\_comparendos](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos) ” Negrilla y subrayado son propios ”.Por ello, sírvase indicarnos si tenía conocimiento del texto enunciado por la SDM en dichas tirillas. En este sentido, sírvase ordenar a quien corresponda pronunciarse en relación a ese actuar evidenciado por la SDM.8. Sírvase indicarnos si tiene conocimiento que algún otro organismo que cuente con comparenderas electrónicas está actuando de esta misma manera y por ende, al expedir estas tirillas, en vez de entregar copia simple del comparendo, como lo ordena la ley aquí citada, enuncie en dichas tirillas algo similar a como lo viene haciendo la SDM”.

Con la contestación allegada a este Despacho Judicial por parte de la entidad accionada se señaló: “(...) A los interrogantes número 1,2,3,4,5,6 y 7. Respuesta: De conformidad con la Resolución 3027 de 2010 en su artículo 5 “se adopta el Formulario Único de Comparendo Nacional. Los organismos de Tránsito ordenarán la impresión y reparto del Formulario Único – Orden de Comparendo Único Nacional el cual deberá contener la codificación de las infracciones y demás datos y características descritas en la presente Resolución.

Parágrafo 1: Hasta tanto se agoten las existencias de Formulario Único de Comparendo Nacional se continuará utilizando la comparendera adoptada por la Resolución 1777 de 2002 y en la casilla observaciones se especificará el código de la infracción de acuerdo a la presente infracción.

Parágrafo 2: Las numeraciones de las ordenes de comparendo utilizadas por los cuerpos de agentes de tránsito encargados de ejercer el control, será asignadas por el sistema RUNT, para lo cual los Organismos de tránsito y demás autoridades competentes deberán cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos para el efecto.

Por todo lo anterior expuesto se concluye que existe un Formulario Único de Comparendo Nacional, que su uso es de carácter obligatorio para todos los organismos de Tránsito autorizados por el Ministerio de Transporte y su cumplimiento se rige por procedimientos y protocolos que se ajustan a las normas existentes.

A su turno se tiene que, la comparendera electrónica la cual es operada por el agente de tránsito cuando evidencia directamente la comisión de la infracción al tránsito y mediante dicho mecanismo es posible efectuar la captura, lectura y almacenamiento e impresión, de la información contenida en el Formulario Orden de Comparendo Único Nacional.

Como quiera que la Comparendera electrónica es usada cuando el agente de tránsito evidencia directamente la comisión de la infracción, el procedimiento para su notificación será el establecido en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, que señala: el agente de tránsito ante la comisión de una infracción a las normas de tránsito ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes . Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (03) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si él conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.

Para el uso de las comparenderas por parte del agente de tránsito, no se requiere de autorización del Ministerio de Transporte, toda vez que esta no es sistema o equipo automático, semiautomático, que detecte la comisión de la infracción.

Mediante la Resolución 3027 de 2002, el Ministerio de Transporte definió las características técnicas del formulario de comparendo único nacional, en ese orden de ideas, el documento arrojado de manera electrónica “tirilla” debe reunir la misma información y características del formato adoptado por la Resolución 3027 de 2002 del Ministerio de Transporte.

Vale señalar, que el comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción lo que quiere decir que a través de este documento lo que se asegura es que el presunto infractor se entere de la detección de la infracción y de no estar de acuerdo con la misma se presente ante la autoridad competente, se haga parte dentro del proceso contravencional, y ejerza su derecho de defensa y contradicción, en ese sentido si el presunto contraventor considera que la orden de comparendo expedida mediante tirilla no reúne las características expresadas en el formato adoptado por la Resolución 3027 de 2010, puede dentro del proceso contravencional poner en conocimiento dicha situación para que se determine su validez.

Además, que, si bien es cierto, el Ministerio de Transporte funge como la autoridad suprema en materia de tránsito en el país, también es cierto que NO ostenta la calidad de superior jerárquico de las autoridades y los organismos de tránsito, dado que estos son autónomos e independientes, de manera que, no es del resorte de este Ministerio ordenar a esos entes que ejecuten sus funciones, ni intervenir en sus actuaciones administrativas.

Finalmente, es preciso destacar que, aquellos entes no son inspeccionados, vigilados y controlados por el Ministerio de Transporte, sino por la Superintendencia de Transporte, en virtud de las funciones establecidas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas por el Decreto 1010 del 2 de febrero de 2000, y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002.

Interrogante 8: El Ministerio de Transporte funge como la autoridad suprema en materia de tránsito en el país, también es cierto que NO ostenta la calidad de superior jerárquico de las autoridades y los organismos de tránsito, dado que estos son autónomos e independientes, de manera que, no es del resorte de este Ministerio ordenar a esos entes que ejecuten sus funciones, ni intervenir en sus actuaciones administrativas.

Finalmente, es preciso destacar que, aquellos entes no son inspeccionados, vigilados y controlados por el Ministerio de Transporte, sino por la Superintendencia de Transporte, en

virtud de las funciones establecidas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas por el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000, y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 769 de 2002”.

Así las cosas, tenemos que la entidad accionada ha resuelto una por una las peticiones elevadas por el accionante **CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ** en su calidad de presidente vocero de la **VEEDURIA DE MOTOCICLISTAS**, indicando que para el uso de las comparenderas por parte del agente de tránsito, no se requiere de autorización del Ministerio de Transporte, toda vez que no es un sistema o equipo automático, semiautomático, que detecte la comisión de la infracción; por otra parte, reseño que el procedimiento para su notificación será el establecido en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, configurándose así un hecho superado.

Además de lo anterior, documentalmente se probó que la respuesta fue enviada a través de la empresa de correos certificado 472 a la dirección de correo [veeduriademotociclistas@gmail.com](mailto:veeduriademotociclistas@gmail.com), dirección digital que coincide con la indicada por el accionante en el escrito de tutela.

En este orden de ideas, el Despacho considera que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho de petición y demás invocados, por lo que, con fundamento en lo brevemente expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo deprecado por el ciudadano **CESAR ROBERTO CELIS VASQUEZ** en su calidad de presidente vocero de la **VEEDURIA DE MOTOCICLISTAS** contra el **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Librense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**  
**JUEZ**



**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ CIRCUITO**

**JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a3fb2efd1230cfcd1593cd84eec5cd7bc8b16625369ad918ba281eec026c0d**

Documento generado en 27/08/2020 06:19:41 p.m.